

Escala Crítica/Columna diaria

*Salario en lugar de gasto social, propone presidente del Grupo Carso *Alaska, Brasil, Holanda y Finlandia, experimentos con renta básica

*Negocian universidades apoyos extraordinarios para cerrar el año

Víctor M. Sámano Labastida

COMBATIR la pobreza ha sido, por lo menos en el discurso, una bandera de campaña desde la derecha más recalcitrante hasta la ultra izquierda más extrema. Entre los muchos experimentos realizados como políticas públicas están los subsidios de diversos tipos, mecanismos que muchas veces sólo contribuyen a crear una nueva burocracia y a generar una mayor dependencia de los beneficiados.

Recientemente el empresario Carlos Slim propuso sustituir el llamado gasto social por un salario. Al participar en un foro de la Cumbre de Negocios de San Luis Potosí, el presidente del Grupo Carso argumentó que: “El gasto social y los programas de gasto social deben revisarse. Algunos de ellos tienen una estructura burocrática, hay corrupción y clientelismo; es mejor dar un salario, por ejemplo a la ama de casa, y que ella decida qué hace con el ingreso. Sería mucho más barato que los programas sociales”.

SIN TRABAJO NO HAY COMPRA

EL POLÉMICO inversionista, quien también sostiene la conveniencia de implantar una jornada laboral de sólo tres días, sostuvo que reemplazar las acciones sociales por un salario pasaría a ser una especie de seguro de desempleo. Esto además, insistió, fortalecería el mercado interno, lo que a su vez generaría empleo y combatiría los altos niveles de pobreza y desigualdad.

A decir de Slim, si bien no hay que descuidar el sector externo, “hay que atender la economía interna, el sector doméstico; buscar cómo invertir más en México. El gran déficit comercial que tiene el país ha crecido por la importación de bienes de consumo y debemos ver qué se puede producir aquí”. En ese contexto inscribe su propuesta de un salario directo a las familias.

Esta idea nos remite a un tema ya abordado en Escala Crítica: el denominado Ingreso Ciudadano Universal (ICU) o Renta Básica Universal, el derecho de todo ciudadano o residente de un país para recibir un ingreso mínimo pagado por el gobierno sin más condiciones que su

registro poblacional (sin burocratismos), esto es independiente de cualquier otro recurso que obtenga por alguna actividad remunerada.

Esta especie de “salario mínimo universal”, que propone Carlos Slim, con sus matices ha sido aplicado en Alaska y Brasil, también de forma limitada en Argentina. De manera experimental se aprobó en Finlandia y Holanda. La garantía de un ingreso mínimo no está solo en la agenda de los países pobres sino también de los altamente industrializados ante la perspectiva del desplazamiento de mano de obra por la acelerada automatización.

Hay una lógica elemental: sin ingresos no hay consumo, sin éste no hay mercado.

UNIVERSIDADES Y EL RECORTE

DESDE hace por lo menos dos décadas las universidades estatales vienen arrastrando crecientes problemas de financiamiento. En mayo de este año, el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara, advirtió que diez de estas instituciones públicas estaban en riesgo de quiebra; recientemente se informó que siete universidades, entre ellas la UJAT, estaban “en quiebra técnica”. El rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, declaró haber sido informado por la Secretaría de Educación Pública, que “por los daños provocados por los sismos y el huracán en septiembre han obligado al gobierno federal” a retirar su oferta de más recursos.

Hay una explicable preocupación no sólo entre los trabajadores universitarios, sino entre los propios estudiantes. El rector de la UJAT, José Manuel Piña sostuvo que en la UJAT “no hay una quiebra técnica como tal; hasta el día de hoy se han cumplido todos los compromisos salariales (y de otro tipo) que tiene la universidad”.

A principios de este año, el subsecretario Jara reconoció que en los dos últimos años se agudizó la falta de recursos para las universidades y lo atribuyó a la caída de los precios del petróleo. En otras palabras hubo recortes presupuestales. Según el funcionario para el pago de nómina y prestaciones de las universidades públicas del país el gobierno federal estaba aportando unos 10 mil millones de pesos anuales.

Desde junio de este año otro listado incluyó a diez casas de estudio –entre ellas las de Edomex, Guerrero, Zacatecas, Veracruz y Chiapas-, en situación “insostenible”, en tanto que la de Tabasco –junto a otras once-, fue colocada en el rubro de “estado crítico”, pero rescatable.

Sólo tres aparecían con relativa suficiencia de recursos: Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora.

Son dos, entre otros aspectos, los que deben resolver las universidades en sus negociaciones con la SEP y con Hacienda a través de la ANUIES: el caso de las pensiones, que en la UJAT ya registraron reformas, y el del gasto corriente.

AL MARGEN

EL VIERNES próximo vence el mandato de Candelario Pérez como dirigente estatal del PRD. José Antonio de la Vega afirmó que el relevo tiene que ser en corto plazo y que sería “suicida” que alguna corriente interna buscara apoderarse “a la mala” de la dirigencia estatal. Juan Manuel Fócil calificó de ilegal a la comisión jurisdiccional que abrió un proceso contra el actual líder perredista y sostuvo que es el CEN solaztequista el que determinará cómo se harán los cambios en el comité local. Los tiempos de la selección de candidatos se empalmaron en ese partido con el relevo de dirigencias, con todas las implicaciones políticas.
(vmsamano@yahoo.com.mx)